



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0110/2017

FECHA: 19 de septiembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0110/2017 presentada por [REDACTED] el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado el 17 de febrero de 2017 en el Ayuntamiento de Somiedo - Principado de Asturias-, la ahora reclamante formuló, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, una solicitud de acceso a la información contenida en el *Inventario de bienes y derechos* del indicado Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber recibido contestación, la solicitante considera desestimada su solicitud y, en consecuencia, mediante escrito registrado en esta Institución el 29 de marzo de 2017 interpone ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. Por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, el siguiente 30 de marzo de 2017 se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias para conocimiento y, por otra parte al Secretario General del

ctbg@consejodetransparencia.es



Ayuntamiento de Somiedo a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

En la fecha en que se dicta la presente Resolución no se ha recibido escrito alguno procedente de la Corporación local de referencia en contestación a la solicitud remitida por esta Institución.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 24.6 de la LTAIBG, en relación con el apartado 2 de su Disposición adicional cuarta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana) han suscrito un Convenio para el traslado



a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. El objeto que ha originado la presente Reclamación consiste en la pretensión de la ahora reclamante de acceder a la información contenida en el “inventario de bienes y derechos” del Ayuntamiento de Somiedo. De acuerdo con ello, cabe recordar que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a *“acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”*, entendida dicha información en un sentido amplio, según el artículo 13 de la misma norma, como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

En atención a esta premisa, en el presente supuesto no cabe albergar duda alguna que el objeto sobre el que se pretende ejercer el derecho de acceso a la información se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG. En efecto, por un lado, ha sido elaborada por un ayuntamiento, entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG según se desprende de su artículo 2.1.a);

Mientras que, por otro lado, ha sido elaborada en el ejercicio de las funciones que sobre la materia atribuye a los ayuntamientos el vigente ordenamiento jurídico. En este sentido cabe traer a colación cómo en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los apartados 1 y 4 del artículo 32 contemplan dos obligaciones de los ayuntamientos en esta materia. Por una parte, se prevé que “las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados” - apartado 1- y, por otra parte que, “el inventario patrimonial de las [...] entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos” –apartado 4-, preceptos que tienen el carácter de legislación básica, aplicable a todas las Administraciones públicas entre las que se encuentran obviamente los ayuntamientos, según se desprende del apartado 5 de la Disposición final segunda de la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

En conclusión ha de estimarse la Reclamación planteada al versar sobre información pública en poder de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG.

4. Sin perjuicio de lo acabado de señalar resulta necesario formular alguna consideración adicional sobre el acceso a la información de dicho inventario de bienes si atendemos a la regulación vigente contemplada en el Real Decreto





1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -desde ahora, RBEL-. En este sentido cabe recordar que el artículo 18 del RBEL señala que en el inventario se reseñaran los bienes, por separado, según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes: 1.º Inmuebles; 2.º Derechos reales; 3.º Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico; 4.º Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación; 5.º Vehículos; 6.º Semovientes, 7.º Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados; 8.º Bienes y derechos revertibles. El contenido concreto de cada uno de estos epígrafes es desarrollado, posteriormente, en los artículos 20 a 26 del RBEL, de cuyo contenido puede deducirse que cabe la posibilidad de que existan algún dato de carácter personal en la información contemplada en los distintos epígrafes que componen el Inventario de Bienes. De este modo, la administración municipal habrá de habilitar la información solicitada previa aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 15 de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR en cuanto al fondo del asunto la Reclamación presentada por tratarse de información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Somiedo a que en el plazo máximo de un mes proporcione a [REDACTED] la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada a la reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo



9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

